



RESOLUCIÓN No. **3604**

**"POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"**

**EL DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**

En ejercicio de las facultades delegadas mediante la Resolución No. 3074 del 26 de mayo de 2011, en concordancia con lo establecido en el Decreto Distrital 109 del 16 de Marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 del 4 de Mayo de 2009, el Acuerdo Distrital 257 del 30 de Noviembre de 2006, conforme a la ley 99 de 1993, Decreto 1594 de 1984 y,

**CONSIDERANDO**

**ANTECEDENTES**

Que el día 11 de septiembre de 2000, se recibió petición con radicado **2000ER24575**, en la cual se solicitaba autorización para talar algunos árboles localizados en el interior de un inmueble, ubicado en la transversal 50 A No. 123-07, interior 16, del Barrio Niza de esta ciudad.

Que en atención a la solicitud, se llevó a cabo visita al lugar señalado por parte de la Subdirección de Calidad Ambiental, del anterior Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA, el día **19 de septiembre de 2000**, y de lo allí encontrado se dejó constancia con la emisión del Concepto Técnico No. 12020 No. Consecutivo ED 3548 de fecha 7 de noviembre de 2000, en el que se consignó que en la zona aledaña a la reja de cerramiento, se encontró el anillado de siete (7) Pinos Patula, de acuerdo al Decreto 984/98 el anillado equivale a tala.

Que mediante **Auto No. 1111** de fecha 7 de diciembre de 2000, la Subdirección Jurídica del anterior Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA, formuló cargos a la señora **OLGA LUCIA PANTOJA**, identificada con la cedula No. 38.877.685 de Buga, por el anillado de siete (7) Pinos Patula, en el interior del inmueble ubicado en la transversal 50 A No. 123-07, interior 16, del Barrio Niza de esta ciudad, el cual fue notificado por edicto el 27 de diciembre de 2000 con fecha de desfijación el 11 de enero de 2001.

Que con Resolución **No. 430** del 28 marzo de 2001, se declaró responsable a la señora **OLGA LUCIA PANTOJA**, identificada con la cedula No. 38.877.685 de





3834

Buga, por el anillado de siete (7) Pinos Patula, en el interior del inmueble ubicado en la transversal 50 A No. 123-07, interior 16, del Barrio Niza de esta ciudad, sin la autorización de la autoridad ambiental competente.

Que en el mismo Acto Administrativo, se impuso una sanción consistente en multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$572.000,00) y se ordenó como medida de compensación, la entrega de 35 árboles al Jardín Botánico, en perfecto estado fitosanitario.

Que la mencionada Resolución, fue notificada en forma personal a la señora OLGA LUCIA PANTOJA, el 20 de abril de 2001, quien mediante radicado 2001ER13804 del 27 de abril de 2001, interpuso recurso de reposición contra lo decidido en la referida resolución, pero revisado el expediente, no aparece acto administrativo que lo desatara, por lo tanto se deduce que el acto administrativo no adquirió firmeza al no estar debidamente ejecutoriado.

Que mediante oficio con radicado 2005EE21792 del 19 de septiembre de 2005, la Subdirección jurídica, la conmina a hacer efectivo el pago de la sanción so pena de ser enviado el caso a cobro por jurisdicción coactiva.

Que mediante radicado 2005ER35403 de fecha 29 de septiembre de 2005, la señora OLGA LUCIA PANTOJA, solicita se le difiera en 3 cuotas el pago de la sanción, aduciendo razones económicas, ante lo cual recibió respuesta de esta Secretaría, en la que se le informa que por estar debidamente ejecutoriada (sic) la resolución, esta fue enviada a cobro por la Unidad de Ejecuciones fiscales de la Secretaría de Hacienda.

Que consultada la base de datos contables y extracontables de la Subdirección financiera, se estableció que no aparece registro de pago de esta sanción.

### CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de conformidad con las disposiciones Constitucionales en especial, las señaladas en el artículo 8º, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, en concordancia con el artículo 79 Ibídem, que contempla el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y establece para el Estado, entre otros, el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 Constitucional, le asigna al Estado el imperativo de planificar el





3834

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, generando desarrollo sostenible, conservación y restauración o sustitución de estos. Atribuye también como responsabilidad estatal la prevención y control de agentes de deterioro ambiental, y que en cuyo caso, se configura la potestad sancionatoria como un mecanismo de protección frente al quebrantamiento de normas ambientales, y que consecuentemente hace exigible el resarcimiento de los daños originados.

Que de acuerdo con las disposiciones Constitucionales, nace para el Estado, la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y la diversidad e integridad del ambiente, por cuanto, la carta política de Colombia, prevé el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, correspondiéndole planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que el régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio", y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que adicionalmente, dentro de las garantías constitucionales del debido proceso sancionador, cobran especial importancia los principios de igualdad, celeridad y caducidad de la acción, que imponen a la administración, el deber de actuar diligentemente y preservar las garantías de quienes resultan investigados; es así como, la caducidad tiene por objeto, fijar un límite en el tiempo para el ejercicio de ciertas acciones, en protección de la seguridad jurídica y el interés general.

Que con relación con la actuación ambiental de carácter sancionatorio surtida dentro del expediente **DM-08-00-2286**, en contra de la señora OLGA LUCIA PANTOJA, identificada con la cedula No. 38.877.685 de Buga, esta Secretaría considera pertinente señalar lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, la cual establece en el artículo 64 que: *"Transición de procedimientos. El procedimiento dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984."*





3834

Que el Decreto 1594 de 1984, define el proceso sancionatorio en los artículos 197 y siguientes, no obstante dicho régimen no contiene la figura de la caducidad administrativa, razón por la cual y, frente al vacío de la norma, nos remitimos a lo dispuesto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, el cual establece que: *“Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas.”*

Que sobre esta materia, vale la pena recalcar la posición del H. Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 4438, MP. Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, frente a la caducidad relacionada con el hecho puntual en el tiempo y el transcurso del mismo por más de los tres (3) años a que se refiere el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: (...) *“Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de consideraciones que no sean solò el transcurso del tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la Ley que al señalar el término y el momento de su instalación, precisa el término final e invariable, debe interpretarse que teniendo en cuenta las normas que dicta el Legislador deben producir los efectos en ellas previstos, y en tal sentido, cuando se hace referencia a la caducidad de la acción prevé el ejercicio de la autoridad administrativa en la medida que también produzca efectos en derecho, es decir, mediante la expedición dentro del término de tres años previsto de manera general en la norma”* (...).

Al respecto, el H. Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, donde se precisó: *“(...) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, **por lo tanto el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor.**”* (...) Resaltado fuera del texto original.

Que respecto al término establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente: (...) *“Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: “ (...) \*Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de*





3834

contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa<sup>6</sup>... (Subrayado fuera de texto).

Que así las cosas y, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo y, las instrucciones impartidas a través de la Directiva No. 007 de 2007 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se deduce que la administración, para el caso en concreto, disponía de un término de 3 años contados a partir de la fecha en que la administración conoció los hechos que dieron origen a la presente actuación esto es, desde el **19 de septiembre de 2000**, fecha en la cual esta entidad verificó los hechos a través de la visita técnica, para la expedición del acto administrativo de sanción, su notificación y debida ejecutoria, trámite que no se surtió, para el caso de la señora OLGA LUCIA PANTOJA, identificada con la cedula No. 38.877.685 de Buga, operando de esta manera el fenómeno de la caducidad.

Que, siendo la caducidad, una institución de orden público, a través de la cual el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos constitucionales de los administrados, no hay duda, que su declaración proceda de oficio, por cuanto, al continuar el proceso, este culminaría con un acto viciado de nulidad, por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite.

En igual sentido, el Doctrinante Luis Alfonso Acevedo Prada, en su obra "Caducidad, Prescripción, Perención, Preclusión y Términos" Primera edición 2004, expresó al respecto de la caducidad lo siguiente: (...) "Ahora bien, en la caducidad ocurre que proceden sus efectos ope legis o de pleno derecho, sin necesidad de que el interesado en beneficio de sus efectos la alegue o proponga como defensa exceptiva. **El funcionario competente en el juzgamiento pertinente, no solo debe sino que está obligado a declararla sin necesidad de petición de parte**" (...) Negrillas fuera de texto.

Que con el ánimo de impulsar el presente proceso, y observando que respecto de la Resolución No. 430 de fecha 28 de marzo de 2001, la cual fue notificada personalmente a la señora OLGA LUCIA PANTOJA, identificada con la cedula No. 38.877.685 de Buga, el 20 de abril de 2001, quien interpuso recurso de reposición mediante radicado 2001ER13804 de fecha 27 de abril de 2001, pero revisado el expediente, no aparece constancia de acto administrativo que lo resolviera, por lo tanto se deduce que el acto administrativo no adquirió firmeza al no estar debidamente ejecutoriado. Corolario de lo anterior, el mencionado acto administrativo no quedo en firme y de conformidad con los argumentos y análisis jurídicos, jurisprudenciales y doctrinales que anteceden, esta Secretaría Distrital





3834

de Ambiente –SDA, considera pertinente declarar la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del presente proceso, sin perjuicio de las demás actuaciones administrativas pertinentes y de las obligaciones que persistan respecto del administrado, con relación a lo actuado dentro del expediente **DM-08-00-2286**, diferentes a las consecuencias derivadas de la infracción de la normatividad Ambiental vigente en el Distrito Capital.

Que a través del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se modificó la Estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, se le asignó entre otras funciones, la de ejecutar el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales e implementar las acciones de policía que sean pertinentes para el efecto.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 109 de 2009, por medio del cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y la Resolución No. 3074 del 26 de mayo de 2011, corresponde al Director de Control Ambiental expedir todos los Actos Administrativos que decidan solicitudes y trámites ambientales de competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente.

En mérito de lo expuesto,

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso iniciado por el entonces Departamento Administrativo del Medio Ambiente "DAMA", hoy Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, contenido en el expediente **DM-08-00-2286** en contra de la señora OLGA LUCIA PANTOJA, identificada con la cedula No. 38.877.685 de Buga, por el anillado de siete (7) Pinos Patula, en el interior del inmueble ubicado en la transversal 50 A No. 123-07, interior 16, del Barrio Niza de esta ciudad.

**ARTICULO SEGUNDO:** Notificar el contenido de la presente providencia a la señora OLGA LUCIA PANTOJA, identificada con la cedula No. 38.877.685 de Buga, en la transversal 50 A No. 123-07, interior 16, del Barrio Niza, del Distrito Capital.

**ARTÍCULO TERCERO:** Publicar la presente Resolución en el boletín ambiental. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTICULO CUARTO:** Enviar copia de la presente Resolución a la Subsecretaria





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Nº 3834

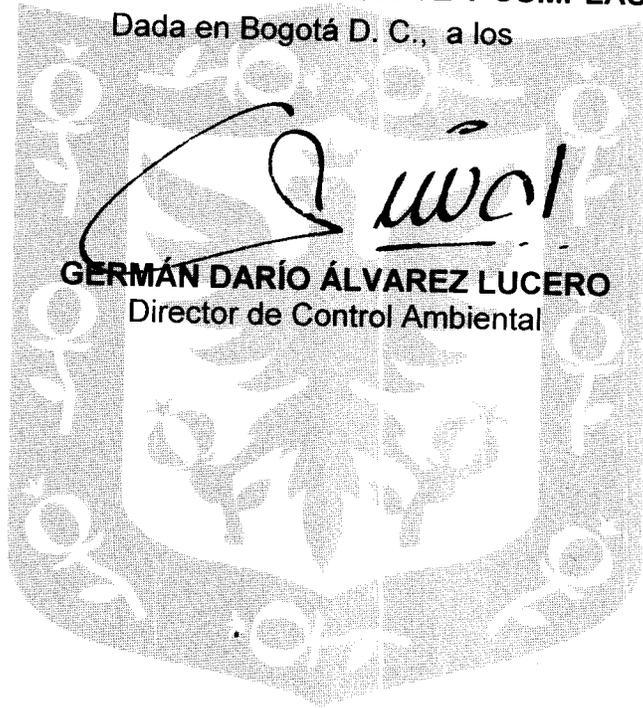
General y de Control Disciplinario, así como a la Subdirección Financiera de esta Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, para lo de su competencia.

**ARTICULO QUINTO:** Contra la presente providencia no procede recurso alguno conforme lo establecido en el Artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

20 JUN 2011

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D. C., a los



**GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO**  
Director de Control Ambiental

Proyectó.- Orlando González M -Abogado  
1ª Revisión.- Dra. Ruth Azucena Cortés Ramírez -Apoyo de revisión  
2ª Revisión.- Dra. Sandra Rocio Silva González -Coordinadora  
Aprobó.- Dra. Carmen Rocio González Cantor -Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre (E)  
Expediente DM-08-00-2286.  
RADICADO. 2000ER24575

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital -DDDI



NOTIFICACION PERSONAL

En Bogotá, D.C., a los 06 OCT 2011 ( ) días del mes de \_\_\_\_\_  
del año (20 ), se notifica personalmente el  
contenido de Resolución 3834 JUNIO/11 a: señor (a)  
OLGA LUCIA PANTOJA C en su calidad  
de PROPIETARIA  
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 38877685 de  
BUGA (VALLE), T.P. No. \_\_\_\_\_ del C.S.J.,  
quien fue informado que contra esta decisión no procede ningún recurso

EL NOTIFICADO:

Dirección:

Teléfono (s):

QUIEN NOTIFICA:

Olga Lucia  
KRA- 57 7 125A-07  
610 9282

Rosael